

RESEÑA DEL X COLOQUIO DE CUENCA. HISTORIOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA 1980-1992

Angeles Barrio Alonso
Universidad de Cantabria

Con el título *Historiografía contemporánea de España, 1980-1992* se celebró del 13 al 15 de mayo en Cuenca el décimo encuentro de una serie —undécimo si se considera el celebrado en la Complutense de Madrid en 1983¹— dirigida por Manuel Tuñón de Lara que representa diez años de trabajos sobre la Historia Contemporánea de España en diez ediciones sucesivas, caracterizadas por el pluralismo metodológico y la multidisciplinariedad. Los Coloquios, que desde 1984 fueron auspiciados por la UIMP, tuvieron sede, primero, en Segovia, después, en Cuenca. En esta ocasión se cerraba la serie sin una garantía explícita de continuidad, al menos, en la forma en que hasta ahora había tomado.

Las alusiones a Pau, por tanto, en este décimo y último Coloquio de Cuenca no podían faltar. Ya en Madrid en 1983 el propio Manuel Tuñón de Lara señalaba la articulación de los «tempos» que representaban Pau, por un lado y, por otro, la expectativa que abría, precisamente, aquel encuentro patrocinado por la Complutense. Si en la primavera de 1979 en Pau se había cerrado un ciclo con la fórmula de balance historiográfico, después de catorce años, en Cuenca quedaban sólo los símbolos afectivos y el material para la comparación: el último Coloquio de Pau de 1979, publicado como *Historiografía española contemporánea* en 1980, resumía lo hecho en los 70; el X Coloquio de Cuenca en 1993

¹ Los contenidos se publicaron en una edición a cargo de J. L. García Delgado *España 1898-1936. Estructuras y cambio*. Madrid 1984.

debía ser asimismo, el balance crítico de los 80. ¿Diferencias entre ambos?. Muchas. El contraste del abigarramiento de aquel aula escalonada de Pau frente a la intimidad de la pequeña sala de Cuenca, el tono académico o la crítica historiográfica por encima de la ideológica, son solo algunos reflejos de una situación diferente en lo sociológico y en lo intelectual en la España de 1993. Por lo mismo, frente al esperanzado criticismo de Pau, hubo en Cuenca un elemento recurrente —una especie de indefinible pesimismo— que no permitió complacencia alguna a la vista del incremento de lo producido ni ante la calidad global de dicha producción.

¿Por qué la insatisfecha crítica de los historiadores en Cuenca?. Porque si algo quedó claro por encima de especialidades, del academismo universitario o de la procedencia geográfica de quienes participaron, es que falta mucho aún para que nuestra producción histórica resista una prueba de comparación con las «grandes» historiografías nacionales occidentales. La tradición historiográfica española es pobre desde sus mismos orígenes, no hay escuelas comparables a las americanas, no existe un paralelo a la historiografía «whig» británica, a la «analista» francesa, ni ha habido en ningún momento una Universidad capaz de crear una escuela específica como la que representa Bielefeld en Alemania. Interrogarse sobre la originalidad de la denominada «historia científica» de los Altamira, Menéndez Pidal, Américo Castro o Sánchez Albornoz no parece útil puesto que ninguno de ellos se interesó por lo contemporáneo. La disciplina denominada académicamente Historia Contemporánea de España arrastra males desde hace decenios y el menor de ellos no es la dependencia de las influencias externas (la francesa, la primera, vía Vicens Vives, las anglosajonas, alemanas e italianas más recientemente) sino las derivadas de una herencia política escindida que tiene sus raíces en los años 30 y que perdura hasta pasados los 60. Falta en España, al menos, una generación del positivismo clásico que debió haber sentado las bases para batirse con los defensores de la escuela histórica alemana. A ambas debieron de haberles sucedido en las cátedras, después de un imposible 45 español, marxistas y empiristas modernos. Pero, no fue así. En esos años, ni se reconocía en España como disciplina académica la Historia Contemporánea, ni la investigación podía prosperar con un régimen vigilante sobre todo aquello que se alejara de la interpretación menendezpelayista del siglo XIX. Esta es la herencia que comparten todavía hoy los contemporaneístas españoles, sea cual sea la especialidad que cultiven.

Los primeros en quejarse de este déficit fueron los historiadores económicos, para quienes los años 80 consagran la institucionalización

como disciplina plenamente autónoma de la Historia Económica con decenios de retraso. No hay en España un Clapham, ni una Universidad que represente algo parecido en ese campo a Cambridge a finales de los años 20, pero sin duda es la Historia Económica la especialidad más emergente en nuestro país en los últimos tiempos aunque no todos, sin embargo, sostuvieron las mismas opiniones sobre el estado de la cuestión ni, según parece, comparten idénticas expectativas sobre el futuro de la disciplina.

José Luis García Delgado hizo una presentación desde la perspectiva de la producción, de la calidad de lo producido y de la institucionalización de la especialidad que invitaba a ser optimistas. Desde los tiempos «prehistóricos» de Valdeavellano, Vicens Vives y Vilar, las generaciones sucesivas —Nadal, Fontana, Anes y Tortella, primero, Tedde y Maluquer, después— hasta la generación de los 50, que García Delgado llamó generación de la democracia, caracterizada por la plena disponibilidad intelectual, la institucionalización de la Historia Económica es total. Las vías de financiación de organismos públicos y privados a la investigación, las publicaciones de revista como *Historia económica* o *Historia industrial* y las actividades asociativas con sus reuniones periódicas, han estimulado el debate y lo han institucionalizado como probablemente en ninguna otra especialidad, grupo o asociación relacionada con el oficio de historiador. Todo ello configura un conocimiento que progresivamente ha ido desplazando su atención de la transición del Antiguo al Nuevo Régimen hacia el siglo xx, que a las instituciones financieras hayan sustituido los estudios de sus políticas y que el lugar del comercio interior lo haya ocupado el comercio exterior. Los trabajos de Leandro Prados de la Escosura, Antonio Gómez Mendoza, Pablo Martín Aceña, Francisco Comín, Albert Carreras o Sebastián Coll son representativos de ese estado de la cuestión.

Menos optimista fue la impresión que dejó Antonio M. Bernal planteando un estado de cosas, cuando menos, problemático, tanto desde el punto de vista académico (hay muy poco papel asignado a la Historia Económica en los nuevos planes de estudios de las Facultades de Económicas) como de la investigación en la historia agraria en donde los cambios han sido notables. De la reforma agraria, que desde la Guerra Civil hasta los años 60 era el tema por excelencia, se ha ido desplazando la atención hacia cuestiones de desarrollo y transformación de la agricultura tradicional (Naredo, García Delgado) que desemboca en la revisión profunda que se opera en los 80. De la consideración de una sociedad agraria enriquecida en los 60-70 se pasa a la del

empobrecimiento que en los 90 es decidida. Dando un vuelco a los conceptos que sirvieron durante el franquismo de arma arrojadiza contra el régimen, se llega ahora a enfoques laudatorios como los que apuntan a que el franquismo gestionó razonablemente la agricultura. Pero, de entre todo esto, destaca la recuperación de la figura del campesino desde un enfoque que niega su personalidad de factor retardatorio (Gómez Oliver, G. de Molina), estima su papel dentro del mercado de trabajo y su complementariedad respecto a otros sectores como la minería, poniéndose, en ese sentido, el acento en la gestión mucho más que en el sistema de propiedad, con lo que se ha podido profundizar en aspectos no tratados aunque con ello no se colman, como Bernal señalaba, las posibilidades de enfoques alternativos: quedan por estudiar aún temas importantísimos, como los montes públicos, por citar un ejemplo representativo, o la figura emblemática, dentro del conjunto, del jornalero.

Frente a la historia agraria, la historia empresarial representa, como señaló Eugenio Torres en su intervención, algo completamente novedoso y que ofrece caminos recién abiertos a su exploración. Su eclosión se ha incentivado en parte desde enfoques de lo social (los trabajos sobre organizaciones patronales de Mercedes Cabrera, Fernando del Rey, Arana, Ysas, etc.) y sobre las élites económicas (Bahamonde, García Sanz, Sánchez Marroyo e, incluso, Gortázar en su trabajo sobre Alfonso XIII). Torres ofreció un repaso exhaustivo sobre lo estudiado —documentadísima su información por especialidades, períodos, enfoques, etc.— y sobre las posibilidades de aspectos aún pendientes de estudio.

Francisco Comín, por su parte, se encargó de exponer el avance que desde la investigación reciente había experimentado el sector público que se confirma como uno de los más beneficiados dentro de la Historia Económica por el apoyo institucional. La Hacienda, tema que desde las primeras generaciones había sido objeto de interés —Fontana, como el ejemplo más significativo— y que había sido tratado en su dimensión política, ha experimentado un avance sustancial cuando el interés se ha ido desplazando hacia aspectos de gastos en servicios públicos, el fraude fiscal —que se abre como una alternativa brillante al gasto oficial de la Hacienda—, las políticas monetarias (Martín Aceña fue el primero) y similares. Faltan estudios, como señaló Comín sin embargo, sobre la deuda pública y sobre el déficit y, sobre todo, faltan las biografías de los ministros de Hacienda, entre los que se destaca Cambó, a quien nunca se ha tratado como gran hacendista que fue.

Antonio Gómez Mendoza partió de la invalidación del diagnóstico del fracaso de la industrialización que abarca, lógicamente, a los transportes planteando que, pese a todo, ha sido el sector del transporte marítimo, frente a los ferrocarriles, el que ha recibido mayor atención. Los estudios sobre la flota mercante han ido creciendo al mismo tiempo que los de los puertos. La industria, en el sentido de empresas, organización e inversiones en fabricación, ha experimentado un avance considerable hasta el punto de que Gómez Mendoza considera el saldo positivo: hay estudios de la industria alimenticia, del vestido, del calzado, de la construcción residencial o de la papelera; sobre industria pesada destaca la química (Nadal), explosivos (Tortella), siderurgia (González Portilla, Fernández de Pinedo), energía (Sudriá, Coll), etc. y apunta algunas cuestiones pendientes de investigación y de extraordinario interés, sin embargo, como el papel de los talleres de reparación en un país como España que dependía de la importación de maquinaria y a los que nadie ha prestado aún atención.

La demografía histórica y los estudios de la familia son claramente una especialidad emergente y de gran vitalidad, como se puso de manifiesto en el documentado informe de García-Sanz Marcotegui y de Fernando Mikelarena que hacen hincapié en la profunda transformación que la ampliación del campo de estudios sobre población supuso durante los años 80, especialmente a partir de 1983 con la creación de la Asociación de Demografía Histórica que significó el cambio en la tendencia en un doble sentido: se rompió el mimetismo y la esclerosis anterior ampliándose los estudios por regiones e incluyéndose la curva demográfica española en las grandes líneas de interpretación sobre la demografía continental. El avance es a todas luces extraordinario porque la cantidad ha significado el desafío a la calidad desde enfoques comparados, con técnicas depuradas y con un debate abierto que parece estimular la aplicación de nuevos experimentos metodológicos a campos de estudio ya conocidos, dentro de unos foros estables que posibilitan la discusión y el intercambio. La transición demográfica está estudiada por regiones o grandes áreas geográficas (Gómez Redondo, Dopico, Nicolau, Arango); la contrastación de variables aplicadas a los estudios de población, tanto a escala regional como nacional, es objeto permanente de exploración (Livi Bacci, Iriso Napal, Reher); los estudios microdemográficos o sobre la base de clases sociales están en desarrollo (Martínez Carrión, Torrents, Pérez Fuentes); el conocimiento sobre los movimientos migratorios, tanto interprovinciales como internacionales, se ha beneficiado asimismo de la colaboración con los geógrafos (Luna Rodrigo, Valero Lobo, Camps Cura, García-Sanz Marcotegui, Yáñez Gallardo,

Sánchez Alonso o Pérez Moreda); no menos se puede decir de la historia de la familia que en los años 80 experimenta un auténtico despertar o del impulso que a escala general se ha operado con las monografías regionales.

La profunda renovación que ha experimentado en los últimos años la historia política alimentaba una cierta expectación sobre las reflexiones historiográficas previstas en el programa. Sin embargo, la ausencia de tres ponentes —Teresa González Calbet, Jose Luis Gómez Navarro, encargados de la segunda parte del reinado de Alfonso XIII (1917-1923) y la Dictadura de Primo de Rivera, respectivamente, y Manuel Ramírez Jiménez, encargado de los partidos políticos desde 1876 a 1936— privó al Coloquio de tres intervenciones específicas sobre la historia política del siglo XX que es de esperar no falten en la edición final. De no ser así se añadiría una enorme laguna a la ya de por sí inexplicable exclusión del programa de la primera etapa del reinado de Alfonso XIII.

En este sentido, la intervención de Angel Bahamonde sobre el Estado liberal y el Sexenio planteó sin paliativos las claves del estado actual de nuestros conocimientos: no hay tema, según Bahamonde, sobre el que hacer la reflexión porque es escasísima la producción en los 80. Desde la publicación del tomo XXXIV de la Historia de España de Menéndez Pidal, dirigido por Jover, que marca un antes y un después, a su juicio, la situación es de pirámide invertida. El cambio de mentalidad en los historiadores españoles que pasaron de la influencia francesa a la anglosajona y a la alemana está, para Bahamonde, detrás de esa realidad de escasez. Los excesos del paradigma de la modernización poblaron de enfoques funcionalistas la historia política y sólo recientemente nos estamos recuperando con las propuestas de Rémond. Bahamonde fue, por tanto, poco optimista en el balance: se ha estudiado el nacionalismo (nacionalismo e historia en Cirujano, Elorriaga y Pérez-Garzón; por otro lado, Jover), el consumo de la cultura (M. Martín, Botrel, Chartier), las relaciones Cuba-España (Bahamonde y Cayuela, Hernández Sandoica), la historia urbana, la religiosidad popular, hay algunos análisis socioeconómicos de las élites, la beneficiencia, la asistencia pública, la marginación, etc. Pero quedan temas capitales: la camarilla palatina, los poderes de hecho, la nobleza, el Senado, por no dejar de lado otros, como la importancia que tienen en el establecimiento del Estado liberal instituciones como Correos y Telégrafos, el servicio militar o los mecanismos de control político.

La Restauración no parece arrojar el mismo saldo sino, muy al contrario, se presenta como el período que claramente experimentó un

«boom» en los 80 aunque éste, en cualquier caso, se ciñe a la primera parte de la Restauración y no al reinado de Alfonso XIII, como expuso Manuel Suárez Cortina que trató de presentar una exposición ordenada y coherente de lo producido sobre las diversas facies del período a partir de seis ejes: Constitución, caciquismo (elecciones y partidos), reforma militar, codificación, relaciones Iglesia-Estado y crisis (relaciones exteriores y crisis colonial). La impresión que dejó Suárez Cortina es que tenemos a nuestra disposición mucho más de lo que se cree sobre el período y que si bien los estudios de elecciones estimularon de manera extraordinaria el conocimiento del fenómeno del caciquismo —en el que destaca al menos cuatro grandes líneas de interpretación— no menos importancia historiográfica tienen otros aspectos —el fenómeno de la codificación es llamativo en ese sentido— tratados desde disciplinas próximas a la Historia —especialmente en el campo de la Historia del Derecho y del Derecho Constitucional y Administrativo— y sin los cuales no es posible entender las dimensiones políticas reales del sistema de la Restauración que no se reducen al funcionamiento electoral ni a la política colonial que ha tenido sus mejores estudiosos en Jover y sus discípulos. Con todo, el balance no fue optimista por completo: la propia debilidad estructural de la historiografía española, por un lado, la focalización en torno a ruptura/reforma (Ortí) y la denominada cultura del consenso (Martínez Cuadrado), por otro, han determinado un tipo de enfoque presentista tan sesgado como el de la modernización. Si a ello se añade el fraccionamiento del objeto de estudio por la «regionalización» —especialmente patente en los trabajos de elecciones y caciquismo— se infiere que, pese a la cantidad, aún son enormes y profundos los agujeros tras la superficie aparentemente lisa. La propuesta se orientó a la interdisciplinariedad, al uso de nuevas metodologías y a la recapitulación sobre ciertos aspectos fundamentales sobre la base de estudios comparados. Suárez Cortina planteó la necesidad de integrar dentro del proceso general lo que está estudiado parcialmente.

La historiografía de los medios de comunicación que presentó Jean M. Desvois arroja un panorama variopinto: hay bastante pero falta sistematización. Así, por períodos está claro que la Restauración y la República son los más estudiados (Saiz, Seoane, Timoteo Alvarez), pero predominan los estudios parciales y concretos. En cuanto al objeto de estudio se ha dado prioridad a la prensa de masas y a la de izquierdas sobre la de derechas y el tratamiento ha sido variado, desde los estudios de propaganda —caso claro los dedicados al período de la Guerra Civil—, algunos sobre humor (el estudio de Bagaría de Elorza), rela-

ción medios-política, de empresas culturales (*España y España Moderna*) y, como en los demás aspectos, el mayor esfuerzo se ha volcado en ámbitos regionales. Lo que faltan, como señaló Desvois, son estudios de contenidos y el tratamiento de la prensa como vehículo de comunicación de ideas.

La historiografía de los nacionalismos estaba repartida en tres intervenciones: una a cargo de Borja de Riquer y Enric Ucelay sobre los nacionalismos y el Estado, otra a cargo de Balcells sobre Cataluña y una a cargo de J.L. de la Granja dedicada al País Vasco. La reflexión crítica de Borja de Riquer y de Enric Ucelay partía de la consideración de los nacionalismos como movimientos anticentralistas, de las tendencias, los límites y las características de las líneas interpretativas de un más que notable volumen de producción histórica en los 80. Ucelay achaca errores conceptuales a la mayoría de la obra producida en un sentido de simbólica redención de las provincias a través de estudios descriptivos que están traspasados de planteamientos esencialistas. Discurso apologético, según Ucelay, que se suele presentar en segmentos espacio-temporales muy reducidos (hasta el punto de que el nacionalismo se reduce a la contemporaneidad), en el que se suele dar la primacía de la política en el sentido de la ideología de la política. Se producen así, para Ucelay, tres grandes líneas de confusión de nacionalismo y vida nacional: se confunde estado y sociedad, se plantea una ecuación entre población y territorio y se confunden rupturas momentáneas con el cambio.

La propuesta de Borja de Riquer es repensar y recolocar el esfuerzo hecho hasta ahora que exige, sin embargo, una saludable cura metodológica que discrimine lo particular y lo universal en el proceso de establecimiento de identidades en el territorio. Para ello habría que volver los ojos a la formación del Estado liberal en busca de esas rupturas y de esas continuidades en las que se detecta la emergencia de una conciencia nacionalista, cuestionar el fenómeno en las guerras civiles del XIX, analizar y comparar los discursos de las élites y de las clases populares, las identidades en períodos como el 23 o el 31 en donde las alternativas que ofrecía el catalanismo eran claramente de ruptura política. Por tanto, según De Riquer, la crisis del Estado del XX es el marco de indagación y es así que hay que hurgar en la organización jurídico-administrativa, en las dificultades de la modernización, en la falta de consenso democrático del régimen liberal, distinguiendo entre administración civil y militar, en la Corona como símbolo, etc. para hallar claves explicativas satisfactorias. Su propuesta, finalmente, es muy clara: sistematización, organización, planificación.

Es quizá la experiencia de la historia de Cataluña la que informaba la posición crítica de Borja de Riquer y de Enric Ucelay. Menos crítica fue la propuesta de José Luis de la Granja porque parte del optimismo que produce otra realidad completamente diferente. La historia sobre el País Vasco es, entre los 60 y los 80, de progresivo aumento en un debate que, paralelamente al crecimiento de lo producido, abandona el campo de la controversia política por el del lenguaje específicamente histórico. No había sido así siempre, desde el XIX hasta los 60 la erudición, por un lado, y una historia más ideológica que científica al servicio del nacionalismo, por otro, formaban junto a elementos dispersos, un conjunto del que destacaban, entre otros, T. Lefebvre y Caro Baroja. La renovación, como señaló De la Granja, comienza a apuntar en los 70 con investigaciones académicas, centradas en distintos temas y períodos (Corcuera, Aróstegui), o en los mismos aunque con enfoques diferentes (Fusi, Olábarri), que coexisten con trabajos, principalmente, sobre temas del siglo XX de orientación nacionalista radical y de factura no académica (Apalategui, «Beltza», «Ortzi»). Los 80 abren una fase distinta en la que, además de un relevo generacional, se institucionaliza el academicismo frente al amateurismo y que se alimenta prácticamente de conmemoraciones y congresos sobre historia vasca. Falta de síntesis, abundancia de historias locales y una casi total primacía de lo contemporáneo, son los caracteres destacados de una producción que, según De la Granja, en el umbral de los 90, no ofrece novedades metodológicas ni enfoques originales al tratamiento analítico de corte positivista imperante.

No muy diferentes fueron los términos que Carlos Forcadell y Eloy Fernández Clemente utilizaron para caracterizar el contingente producido en el capítulo de «historia por regiones». Es evidente que la situación de los 70 dio un vuelco en los 80 pero no está claro que en los 90 se esté en condiciones de dar respuesta a las demandas planteadas. La creación de nuevas Universidades (significativos los ejemplos de Cantabria y Extremadura) y la consolidación del Estado de las Autonomías, fueron factores decisivos para más y mejor historia regional, pero con todo, pasada la época, a principios de los 80, de la elaboración de las enciclopedias y de las historias generales de las regiones, queda claro que no se ha hecho historia comparada y apenas síntesis (*España. Autonomías* dirigida por Fusi es excepcional) y que la construcción del objeto de conocimiento ha sido, por lo general, sobre un sujeto histórico inexistente (el recurso a lo nacional como referencia de un determinado problema en «tal sitio», como muy gráficamente expuso Fernández Clemente). Los temas tratados son variados, desde desamortizaciones a

industrialización, pasando por movimiento obrero, historia agraria, minería, banca, comercio y población y, por épocas, llama la atención el predominio de la Segunda República y la Guerra Civil y la ausencia de estudios sobre el franquismo (a excepción de los trabajos de E. Nicolás en Murcia).

En una línea por completo alejada de la reflexión historiográfica se situó la intervención de Albert Balcells que propugnó un punto de vista catalán para la Historia desarbolando todo intento de justificación del supuesto de la irracionalidad de la historia regional o del prejuicio del nacionalismo. Balcells rechazó la neutralidad en la Historia de Cataluña postulando la validez epistemológica de la problemática relación sujeto-objeto en las ciencias sociales a partir del argumento de la función eminentemente social de la Historia.

Sobre lo social centró Santos Juliá el tema de su intervención. El hecho de que no haya en España una escuela equivalente a la de los fabianos británicos como no hay un Durkheim o un Weber en la tradición académica y de pensamiento determina, en su opinión, la ausencia de una historiografía sobre historia social. Hay reflexiones recientes sobre historia social, sobre contenidos, límites y posibilidades de tal especialización pero no se han modificado sustancialmente las carencias de una producción histórica (el caso de Jover lo señala como casi excepcional), que haya tomado lo social como objeto prioritario de análisis. No caben, pues, más que posiciones críticas sobre la historia social que hacemos. La propuesta de Santos Juliá es la de la superación del paradigma de la frustración que se origina en la generación de 1914, que se reafirma por la Guerra Civil y el franquismo y que se articula sobre el fracaso de la revolución industrial que acarrea la pervivencia de los estamentos del Antiguo Régimen dentro de la escasa configuración de la sociedad civil en el marco de un débil Estado nacional.

La preocupación por someter a prueba determinados marcos de análisis aplicados a los movimientos sociales estaba en la intervención de Manuel Pérez Ledesma mucho más clara que la de reflexionar sobre lo producido en torno a movimientos sociales y organizaciones obreras. La determinación del umbral teórico del historiador debe estar en relación al objeto de conocimiento (verdadera «materia prima») histórico al que se aplica. De ahí que la indeterminación de algunas categorías utilizadas en los ámbitos de la sociedad no las haga aptas para explicar las realidades a las que se aplican: por ejemplo, no siempre un movimiento social se define en sentido de renovación o cambio, la participación racional no implica objetivos económicos necesariamente, sus protagonistas no siempre son miembros de una clase, etc. Lo que pre-

sentó Pérez Ledesma fue, en consecuencia, una especie de «test» o prueba de resistencia de algunos marcos de análisis aplicados al carlismo y lo hizo a partir de una referencia explícita a las teorías «de alcance medio» de Merton (aunque sin valoraciones ni comentarios, por otro lado, sobre la responsabilidad que, en ese sentido, Glaser o Strauss atribuyen a la Sociología, o mejor, al sociólogo).

Paul Aubert, que se encargó de la historia cultural, expuso las dificultades de acotación de un terreno tan ambiguo por su polisemia como la cultura. Parte de su intervención fue empleada en exponer las diversas consideraciones, a modo de clasificación terminológica, sobre el ámbito de la cultura y sus posibilidades ante la Historia. Desde la consideración de la cultura como sistema de valores fundamentales de una sociedad, Aubert destacó la indefinición del campo de investigación que en España, muy claramente, ha estado a expensas de las influencias externas (anglosajonas y francesas, especialmente) y los riesgos que se pueden derivar de una hipotética fragmentación si se desarrolla desmesuradamente la especialización en ese terreno, con lo que la variable cultura perdería su utilidad epistemológica en la construcción del discurso histórico.

A cargo del director del Coloquio estaba la historiografía sobre la Segunda República. Tuñón de Lara, haciendo un auténtico esfuerzo por sintetizar, señaló algunas líneas de avance en los 80 con nuevos enfoques que, con todo, en buena parte de ellos, respondían a investigaciones iniciadas anteriormente. Del conjunto, destacó especialmente, los trabajos de Santos Juliá, de Balcells y De Riquer para Cataluña, de Corcuera para el País Vasco, de Cardona en el tema militar o de Mercedes Cabrera en la patronal. Por regiones, señala de importancia lo producido en Asturias, Valencia y Andalucía, resalta el avance extraordinario en el cultivo de las biografías con la apertura y localización de archivos privados y de testimonios (Azaña, Hidalgo, Portela Valladares, Madariaga), destaca los estudios de relaciones internacionales de Angeles Egido, Enrique Moradiellos o de Ismael Saz sobre Mussolini, el de Reig sobre la justificación ideológica del Alzamiento y concluye que el balance, aunque fecundo, no impide que se eche en falta una síntesis, una historia de la Segunda República que integre el avance gigantesco que se ha hecho en el conocimiento de la época en los últimos años, con las interpretaciones novedosas sobre determinados aspectos sociales, políticos o económicos. Tuñón de Lara planteó todo esto desde la insistencia de integración del período de la República dentro del conjunto de la Historia del siglo xx, que adquiere sentido con lo anterior y lo posterior.

La historiografía sobre la Guerra Civil estuvo a cargo de Julio Aróstegui y de Juan A. Blanco que plantearon las líneas directrices del avance más que notable en el estado de conocimientos debido a la celebración del cincuentenario (en los 80 se publica el doble de lo publicado anteriormente sobre el tema) y la caída posterior, hasta el punto de que podría decirse que, desde mediados de los 80, la investigación sobre Guerra Civil se halla estancada. Pero, quizá, lo más importante es la constatación de que ha perdido su carácter de tema de «alta tensión», en términos de Aróstegui, que se han modificado los enfoques y las interpretaciones, tanto porque a la Guerra Civil se han dedicado historiadores jóvenes, como porque algunos clásicos han replanteado sus viejas aportaciones (Bolloten). Desde el punto de vista de la secuencia de proceso, hoy se ha impuesto definitivamente entre los historiadores académicos la periodización de los años treinta como un ciclo completo, en el que se incluye la guerra y que cuestiona, en cierto modo, el marco explicativo anglosajón que vinculaba el fracaso democrático de la República como desencadenante de la Guerra Civil (Jackson).

El cincuentenario abrió expectativas: estimuló, por un lado, a la elaboración de tesis doctorales, la celebración de Congresos (el de Salamanca y el de Granada en 1986 y el de Barcelona, el último por ahora, en 1992), dió el pistoletazo a la carrera de la competición entre diversas empresas editoras de periódicos (*El País*, *Abc* y muchos otros de ámbito local o regional como *El Periódico de Cataluña*, *El Norte de Castilla*, o *Ideal* de Granada, son representativos), a la elaboración de síntesis —la mejor, a juicio de Aróstegui, la de *Historia 16*—, a que las revistas especializadas, de departamentos universitarios o de carácter local, dedicaran al tema números especiales (*Arbor*, *Letras de Deusto*, *Cuenta y Razón*, *Affers*, *Studia Histórica*, *Canelobre*, etc.), a que se ampliaran conocimientos con la exhumación de datos y testimonios para las memorias y biografías y, finalmente, a que historiadores como Tusell, Andrés-Gallego o Cuenca que, hasta entonces, no se habían dedicado al tema, contribuyeran por la oportunidad.

Con todo y a pesar del extraordinario avance en el conjunto y la disponibilidad de fuentes inéditas o imposibles en los 60 y los 70, predominan los trabajos sectoriales: aspectos socioeconómicos han sido tratados en los estudios de las colectivizaciones de Casanova, Bosch y Bernecker, mientras que aspectos de economía y política siguen teniendo la referencia de Angel Viñas en *Guerra, dinero y dictadura*; la historia militar (Cardona, Alpert); la historia política (Casterás, Tusell, etc.); la represión (Reig, Solé Sabaté y Villarroya); la cultura a través de propaganda y medios de comunicación (García Jiménez, Garitaonan-

día, Calleja-Limón, Tuñón de Lara, Salaün) o las visiones de la guerra de Ucelay. Se dio, asimismo, un avance importante en las aportaciones sobre las dimensiones internacionales de la guerra (Carr, Viñas, Moradiellos, etc.), sin contar con las historias regionales, entre las que habría que destacar las aportaciones en Cataluña y en el País Vasco.

Javier Tusell no hizo exactamente un balance de la historiografía sobre el franquismo sino más bien una reflexión sobre la oportunidad perdida que el propio centenario del nacimiento de Franco podría haber propiciado para el debate historiográfico. La falta de fuentes disponibles ya no es hoy coartada y si se establecen ciertas comparaciones con la historiografía de Italia o de Portugal se ve, a juicio de Tusell, cómo la historia política ha quedado superada por la económica o por la de las relaciones internacionales. Con todo, Tusell señaló la superación en los 80 de la fase «resistencia» y el distanciamiento y el afán de objetividad de la historia académica para superar la vieja dialéctica franquismo/oposición que junto al desplazamiento de los especialistas en política por los historiadores sitúan al franquismo como objeto de conocimiento en su sentido específico. Se trata, en consecuencia, de profundizar en la naturaleza del franquismo y en su evolución.

El balance no era muy optimista, sin embargo: Tusell hizo hincapié en la necesidad de apoyos institucionales, especialmente en la plena disponibilidad de las fuentes (publicación tanto como ordenación de archivos privados), en la incorporación del tardofranquismo como objeto de análisis y en la medida de lo posible evitar la «provincialización» del objeto de estudio.